Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil trece.

VISTOS:

A fojas 12 don Camilo Alejandro Barbería Espinoza, mediante abogado habilitado, deduce recurso de protección en contra del Presidente de la Federación de Automovilismo de Chile – en adelante “La Federación” - don Mauricio Melo Avaria.

Sostiene que fue notificado por medio de un correo enviado desde la Secretaría Administrativa de La Federación, que el Tribunal de Honor de la misma, había dictado sentencia en primera instancia en un proceso disciplinario seguido en su contra, por el cual se le condenó a una pena de 8 años de suspensión de toda actividad federativa, al tiempo que le informa que puede recurrir de reposición contra el fallo, en plazo de 10 días contados desde la notificación de la misma resolución. Fue así como dedujo ese recurso el 26 de agosto de 2013, y no obstante estar pendiente la resolución del mismo, por orden del recurrido, se le suspendió la licencia de piloto, lo que le impidió participar en la carrera Gran Premio de la Hermandad. Hasta el día de presentación del recurso, se le impide de participar en cualquier carrera deportiva de automovilismo federado. El acto del recurrido es ilegal, toda vez que contraviene artículo 40 Ley 19.472 del Deporte, que dispone expresamente que las organizaciones deportivas que cuenten con más de cien socios, que sean personas naturales o que estén integradas por más de cinco personas jurídicas, deberán contar con una comisión de ética o tribunal de honor, mismo que tendrá facultades disciplinarias. El Reglamento de dicha ley puntualiza en su artículo 41, la forma de composición de la comisión de ética o tribunal de Honor, la que tendrá entre otras las siguientes atribuciones o funciones: a) Recibir, conocer, investigar y resolver los reclamos por faltas a la ética y disciplinas deportivas: b) Aplicar las penalidades, sanciones o

medidas disciplinarias por dichas faltas, que no podrán ser otras que las que se establezcan taxativamente en los estatutos.

Sostiene que la medida es arbitraria, pues la suspensión de la licencia se verifica el mismo día en que el recurrente participaba en una carrera, gestión en la cual el recurrido tomó parte directa, presionando a los Comisarios de la prueba, forzándolos a hacer cumplir la sentencia de primera instancia del Tribunal de Honor, el mismo día 16 de agosto, no obstante estar pendiente el procedimiento por la interposición de recursos de nulidad, reposición y apelación, lo que le impide ejercer sus derechos como socio federado, no obstante no estar ejecutoriada esa sanción.

Sobre las garantías infringidas por el acto contra el que recurre, arguye que este vulnera el artículo 19 N° 3 inciso 4, ya que el recurrido se arroga facultades jurisdiccionales, constituyéndose en una comisión especial. También sostiene infringido el 19 N°2, al establecer el recurrido diferencias entre el recurrente y los demás pilotos. Como se le impide el ejercicio de los derechos inherentes a su calidad de socio, también está afectado el numeral 15 del catálogo y el 24, en lo relativo a su derecho a asociarse y al de propiedad de socio de la organización federativa. Termina solicitando se acoja el recurso, restableciendo el imperio del derecho, disponiendo que el recurrido ponga término a la suspensión administrativa de la licencia deportiva de piloto del recurrente en forma inmediata, reactive dicha licencia para habilitarlo a participar en las actividades deportivas y ejercer todos los derechos como socio federado sin ninguna limitación; que ordene al recurrido se abstenga de ejercer medidas que importen sanción alguna contra el recurrente, así como también que respete las decisiones del Tribunal de Honor en el proceso disciplinario contra el recurrente actualmente en curso y aplicarlas en su caso, solo una vez firmes y ejecutoriadas y que deje sin efecto cualquier otra medida que afecte el ejercicio de los derechos del recurrente como socio de la organización, todo con costas.

A fojas 42 informa el recurrido. Expone que el Tribunal de Honor de la Federación, inició una investigación por supuestas infracciones al Reglamento General de la Federación, por parte del recurrente, quien habría incurrido en denuncias difamatorias en contra de los directores de la Federación, al tiempo que también denunció al recurrido y a tercera persona, por haberle otorgado licencia de conducir de manera tal de competir en la carrera "Gran Hermano". Estos hechos se encuentran tipificados en el artículo 49 del Reglamento letra a y b. Conforme al Estatuto de La Federación, su Tribunal de Honor - ente autónomo elegido por la Asamblea General - tiene por función ejercer las potestades disciplinarias, según señala la Ley del Deporte. En razón de ello, dictó sentencia el 9 de agosto de 2013, sancionando al recurrente a la suspensión por ocho años de toda actividad deportiva en La Federación. De tal suerte, no es efectivo que el recurrido hubiere suspendido la licencia deportiva del señor Barbería, pues este efecto se produce por la dictación de la sentencia del Tribunal de Honor, situación reglamentada en los artículos 43, 46 y 49 de su Reglamento, razón por la que desde la notificación por carta certificada de la misma, desde el 17 de agosto de 2013, el recurrente se encuentra suspendido. Ahora respecto de la existencia de recursos pendientes en contra del referido fallo, conforme al Reglamento General, su artículo 43 dispone que la interposición de recursos, no suspende los efectos del fallo. Como parte de sus alegaciones no contenidas en el informe, representante del recurrido sostuvo que la sede y oportunidad para discutir la constitucionalidad y valor del Estatuto y Reglamentos de La Federación, no es ésta.

Evacuado el informe, se dispuso la vista de la causa misma, que se suspendió con la finalidad de obtener de la recurrida la remisión del reglamento de la Federación al que se hizo alusión por las partes. Cumplido el trámite, se ordenó traer los autos en relación así como la agregación extraordinaria de la causa, el 2 de diciembre en curso, oportunidad en la que alegaron defendiendo sus posiciones, abogado representante del recurrente y patrocinante del recurrido.

Considerando:

Primero: El llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: En el presente recurso se indica que el acto supuestamente ilegal y arbitrario, correspondería a la actividad desplegada por el Presidente de la Federación de automovilismo, quién habría impedido que el recurrente tomara parte en una carrera como miembro asociado de esa Federación, exigiendo a los Comisarios del evento el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal de Honor de la Federación, misma que a la fecha se encontraba con recursos pendientes. Desde esa fecha además el recurrido habría eliminado al recurrente de los registros públicos de pilotos federados, así como privado de los derechos como socio.

Tercero: Conforme a los antecedentes acompañados por las partes con sus presentaciones, informes y diligencias dispuestas de oficio por esta Corte, y en lo referente a la calificación del acto reclamado, es posible tener por justificados los siguientes hechos:

1. Camilo Barbería Espinoza, pertenece al Club de Volantes de Punta Arenas, mismo que le otorgó licencia de piloto registrada bajo número Fadech B 1597.
2. El Club de Volantes de Punta Arenas es una organización deportiva que forma parte de la Federación Chilena de Automovilismo.

3. El 9 de agosto de 2013 el Tribunal de Honor de la Federación, en procedimiento seguido contra el señor Barbería Melo, le impuso la sanción de ocho años de suspensión de toda actividad federativa. Esa sentencia fue notificada al recurrente por cartas certificadas remitidas el 12 y 14 de agosto, y por correo electrónico del 16 de agosto de 2013.
4. El 16 de agosto de 2013, en circunstancias que el recurrido participaba de la competencia automovilística “Gran Premio de la Hermandad 2013”, fue excluido de la carrera por los Comisarios Deportivos del Evento.
5. El 26 de agosto de 2013 en la sede de La Federación se recibió presentación del abogado del señor Barbería Melo quien solicitó a los Directores de la Federación de Automovilismo la nulidad del procedimiento disciplinario; en escrito separado de la misma fecha, presentó al Tribunal de Honor de la Federación recurso de reposición y apelación subsidiaria en contra del fallo.
6. A la fecha de la vista de la causa, los recursos de nulidad del procedimiento sancionatorio, y de reposición con apelación subsidiaria contra la sentencia, aún no son resueltos.

La precedente relación de hechos se construye de la lectura de los documentos aportados por las partes, tales como el Estatuto de la Federación y sus complementos, que señala quienes la componen así como sus órganos, las copias de la sentencia del Tribunal de Honor, y los correos electrónicos relativos a su notificación, copia de los recursos deducidos por el condenado, carta de fojas 8 relativa a la expulsión del recurrente de la carrera automovilística que se realizaba en Rio Grande. Los anteriores hechos, además, resultan aceptados por las partes conforme sus exposiciones en los alegatos al tiempo de la vista de la causa.

Cuarto: Conforme el Reglamento General de la Federación, agregado a fojas 122 y siguientes, en su Título VI se regulan las infracciones, sanciones y procedimiento disciplinario, preceptuándose expresamente en su artículo 41,

en cuanto al sistema recursivo, que “dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde su notificación, el afectado podrá presentar recurso de reposición al Tribunal de Honor para que este reconsidere su decisión”. Luego de regular expresamente la forma del recurso, el artículo 43 del mismo texto también preceptúa el efecto de su interposición, precisando que la misma no suspenderá en caso alguno los efectos de la medida decretada.

Quinto: Respecto de la ilegalidad invocada, la revisión que corresponde efectuar en esta sede, se agota en descartar que se trate de una actuación de facto o desprovista de toda apariencia de juridicidad.

En ese orden de ideas, la calificación de ilegal o arbitraria es en razón del acto atribuido al Presidente de la Federación, puntualmente su intervención el 16 de agosto cuando los árbitros de la carrera, habrían descalificado al recurrente y la ejecución administrativa de un fallo pendiente.

Sexto: En razón al hecho atribuido como ilegal, a pesar del abundante acopio de antecedentes del recurrente en la línea de cuestionar la legalidad de la administración del Presidente de la Federación, poco y nada se ha aportado para establecer el presupuesto de hecho en el que descansa la alegación de intervención, que por esta vía enmienda solicita.

Sobre la mentada carrera del mes de agosto, realizada en la Patagonia (según se lee en el encabezado de la carta de fojas 8) el recurrido no estaba presente, o las personas que lo descalificaron o le negaron la posibilidad de participar, serían los Comisarios del Evento.

Respecto de la eliminación en la base de pilotos registrada en el sitio de la Corporación, no se ha controvertido que desde la fecha de notificación de la sentencia del Tribunal de Honor, el recurrente ha sido despojado de su condición y derechos de piloto federado, como efecto de la sentencia dictada en su contra, y no de la actividad antojadiza del Presidente de la Federación.

Séptimo: La actividad desarrollada por el Presidente, desde la perspectiva del análisis formal que a esta Sede le compete, se encuentra

apoyada en la reglamentación otorgada por la propia Federación, la que a su turno se rige conforme las normas enunciadas, así como por sus Estatutos y modificaciones. Desde esta perspectiva el acto reclamado - el cumplimiento de una sentencia no ejecutoriada - no puede ser calificado de ilegal.

A su turno, el marco y contenido de competencias de las autoridades federativas, se sujeta al control que de estas organizaciones intermedias le corresponde a la autoridad del Ministerio de Justicia (Departamento de Personas Jurídicas) en su calidad de Corporación, como también a la potestad fiscalizadora del recientemente creado Ministerio del Deporte, otrora Instituto Nacional del Deporte (Departamento de Organizaciones Deportivas).

Los cuestionamientos levantados en esta sede a propósito de las alegadas irregularidades de la Federación y fiscalizaciones a las que se le ha sometido, sobre el cumplimiento tardío de formalidades como reducción a escritura pública de sus modificaciones estatutarias, o impugnaciones de elecciones internas, no son materia del recurso, en razón de lo que se imputó como acto ilegal y arbitrario, y tampoco corresponde a esta sede su conocimiento, por exceder con creces a la naturaleza extraordinaria y cautelar de este procedimiento.

Octavo: Ahora, en lo relativo al control de la arbitrariedad del acto recurrido, a riesgo de resultar majaderos, no debe olvidarse que lo impugnado en definitiva es la posición del Presidente de la Federación quién amparado en su normativa vigente, ha exigido el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Honor que priva de sus derechos de asociado al recurrente. La sentencia de ese órgano interno, por ahora, no ha sido materia del presente recurso, pese a la abundante documentación aportada por el recurrente en orden a justificar sus alegaciones de infracción a la regla del debido proceso. Por lo tanto, esta no es la oportunidad, ni por ahora, la instancia para analizar el mérito de la referida sentencia, misma emanada de un órgano provisto de potestades extraordinarias y dotado de una autoridad específica.

En tanto esté vigente la norma estatutaria que no suspende los efectos del fallo por la interposición de recursos en su contra, el procedimiento aplicado al recurrente, es el mismo al que están afectos todos los socios que por vía de asociación a la Federación se someten a su reglamentación. Desde esta perspectiva, el acto tampoco es arbitrario, pues encuentra su fundamento en un fallo recaído en un procedimiento que se ha extendido por bastante tiempo y que deberá ser objeto de análisis formal (por la presentación de la petición de nulidad procesal), como sustancial, al conocer de la reposición impetrada.

Las alegaciones de la recurrente, en orden a la afectación de su derecho al debido proceso, están directamente relacionadas con este punto y no pueden ser solucionadas con ocasión de la presentación de este recurso, primero, por no tratarse el recurrido de la parte que sancionó o se erige en juzgador, pues por su posición solo ha procedido a disponer administrativamente la ejecución del fallo, en la medida que la reglamentación interna se lo faculta, en segundo lugar, por no tomar parte alguna en la tramitación y resolución de los recursos pendientes en contra de la sentencia, los que son de la competencia del Tribunal de Honor de la Federación.

Respecto de su derecho a asociarse, el mismo reconoce en este caso como límite su ejecución en el marco estatutario vigente, por lo que la expulsión o la privación de sus derechos corporativos, conforme las reglas de la propia Federación, no importan el desconocimiento de su derecho de la forma reclamada, por lo que tampoco se puede colegir afectada tal garantía, de modo de encontrar reparación por este arbitrio procesal.

Finalmente en lo relativo a su derecho de propiedad respecto de su condición de socio, la misma es una calidad que le habilita al ejercicio de ciertos derechos e impone obligaciones, condicionadas a la calidad de asociado conforme la reglamentación estatutaria vigente, primero del Club de Volantes de Punta Arenas y por éste, al de la Federación de Automovilismo de Chile, por lo que la privación del derecho a ejercer como socio forman parte

de las condiciones de ejercicio del derecho, el que no se escinde para ingresar como derecho a su patrimonio de la forma reclamada, razón por la que tampoco se puede concluir afectada la garantía del numeral 24 del catálogo de derechos constitucionales amparables por este recurso.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional planteada a fojas 12 por don Camilo Barbería Espinoza, sin costas.

Redacción de la ministra suplente señora Troncoso Bustamante.

Regístrese y notifíquese.

N° 108.681 - 2.013

Pronunciada por la **Novena Sala** de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por los ministros señor Juan Antonio Poblete Méndez y señora Carla Troncoso Bustamante.